

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio No. 36

MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-23-31-000-2018-01245-00
DEMANDANTE:	CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
DEMANDADO:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO:	RESUELVE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar formulada por el señor CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA .Gen el proceso ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

II. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

El demandante solicitó le fuera concedida la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que a continuación se relacionan:

1. Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 004 del 3 de abril de 2008, proferido por la Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, a través del cual se declaró la responsabilidad fiscal del ingeniero CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA en cuantía de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS (\$5.840.640.322).
2. Auto No. 0223 del 8 de mayo de 2018, proferido por la Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, a través del cual se resolvió un recurso de reposición contra el anterior acto administrativo, en lo que respecta a la situación jurídica del demandante.
3. Auto No. 00649 del 8 de junio de 2018 proferido por la Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la Contraloría General de la



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-31-000-2018-01245-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

República, por medio del cual se resuelve el grado de consulta y los recursos de apelación contra el fallo de responsabilidad fiscal, en lo que respecta a la situación jurídica del demandante.

Manifiesta el demandante en su solicitud de medida cautelar, que la misma es completamente viable toda vez que cumple con los requisitos para ser concedida ya que los actos administrativos demandados y solicitados para suspensión de sus efectos son violatorios de las disposiciones normativas invocadas en la demanda y en el escrito de solicitud de medida cautelar.

Señala inicialmente el demandante que los actos administrativos demandados y solicitados en suspensión sus efectos mientras se da el transcurrir del respectivo proceso judicial, desconocieron lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y lo dispuesto en los artículos 5 y 53 de la Ley 610 del año 2000.

Luego procede el demandante a realizar un esbozo acerca los conceptos de “fumus boni iuris” y “periculum in mora”. Sobre el primero manifiesta que el Consejo de Estado ha comprendido dicha figura en el entendido de que en el caso planteado haya apariencia de buen derecho, el cual es configurada por un análisis que desarrolla el juez de manera provisional con base en un conocimiento sumario y de juicio se de verosimilitud o de probabilidad sobre el caso concreto.

Sobre este primer aspecto, el demandante manifiesta que hay un ambiente de buen derecho en cuanto a que los actos administrativos demandados y solicitados en suspensión de sus efectos, omitieron dar aplicación a las normas consagradas en los artículos 5 y 53 de la Ley 610 de 2000, toda vez que el hoy demandado al momento de expedir dichos actos no realizó la correspondiente motivación para determinar si el demandante actuó con dolo o cual grave en el ejercicio de sus funciones, ni tampoco realizó un análisis sobre la relación de causalidad entre las funciones desempeñadas por el hoy demandante y el detrimento patrimonial ocurrido.

Adicional a lo anterior, existe una clara ilegalidad por parte de los actos administrativos hoy demandados ya que también son violatorio del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, ya que el hoy demandado aplicó una presunción legal que trae consigo la Ley 1474 de 2011, para hechos que se configuraron en el 2007, 2008 y 2009, es decir, juzgó con fundamento en una norma inexistente.

Manifiesta la importancia de que la medida cautelar sea conseguida, ya que debe garantizarse el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, los cuales se pueden ver afectados ya que la Contraloría General de República no cumplió con la obligación de probar los elementos subjetivo y de causalidad que se exigen para proferir un fallo de responsabilidad fiscal.



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-31-000-2018-01245-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Seguidamente, el demandante expresa que la Contraloría en la parte motiva del fallo de responsabilidad fiscal, brilla por su ausencia en cuanto a acreditar el elemento subjetivo, componente esencial de la responsabilidad fiscal y que solo es hasta la parte resolutive del mencionado fallo que la Contraloría expresa que el hoy demandante debe responder por culpa grave, olvidando que en la parte motiva de dicho acto debió encuadrar la conducta. Dicha omisión implica una violación directa de los artículos 5 y 53 de la Ley 610 de 2000.

Ahora bien, la violación del hoy demandado es aún más grave cuando decide hacer remisión a la Ley 1474 de 2011, cuando los hechos ocurridos en el caso ocurrieron entre los años 2007 y 2009, es decir, hay una clara violación con respecto al artículo 29 de la Constitución, el cual establece que nadie debe ser juzgado sino conforme a una ley preexistente, al acto que se le imputa.

Por otro lado expresa el demandante que causa gran impresión como la Contraloría, en el fallo de responsabilidad fiscal no realiza un análisis juicioso sobre el nexo de causalidad entre la conducta desarrollada por el hoy demandante el detrimento patrimonial generado, máxime cuando del expediente vislumbrada que él mismo tenía su base en una violación del sector central del INVIAS en aperturar un proceso licitatorio sin cumplir lo ordenado en el principio de planeación.

En cuanto al segundo aspecto que el demandante intenta vislumbrar en su escrito de medida cautelar, se encuentra el "periculum in mora", para ello se centra en el concepto del mismo y en ese sentido expresa que dicha figura consiste en que debe demostrarse que de no adoptarse la medida cautelar, solicitada se perdería la efectividad de la sentencia, es decir que se causaría un daño que a medida que el proceso transcurre puede ser más gravoso.

Manifiesta el demandante que este es un requisito de la medida cautelar solicitada, que se encuentra cumplido en virtud de que la Contraloría mediante la expedición de los actos administrativos demandados, violenta las disposiciones del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 5 y 53 de la Ley 610 de 2000.

Manifiesta que el demandante percibe una asignación salarial de \$5.622.969 que con los descuentos por seguridad social y retención en la fuente queda en \$5.006.731 y que en conjunto con su esposa (quien aporta \$3.000.000), su grupo familiar cuenta con unos ingresos mensuales de \$8.000.000 aproximadamente, los cuales deben ser utilizados para el pago de estudios de sus dos hijas, alimentación, servicios públicos, medicina prepagada, obligaciones, vestuario, pago de impuestos, entre otros.



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-31-000-2018-01245-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ahora bien, la Contraloría expidió Auto No. 059 del 29 de agosto de 2018, a través del cual abocó competencia del proceso de cobro coactivo No. 689 e iniciar la etapa de cobro persuasivo contra el hoy demandante, quien según la misma entidad, el demandante adeuda la suma de \$1.165.071.826 a la Contraloría y \$4.675.568.496 a la compañía de seguros, quien se subrogó la obligación.

Manifiesta que la medida cautelar es el único medio idóneo, oportuno y eficaz de defensa para el demandante poder garantizar sus derechos.

III. ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA

Considera el demandando, que la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que han sido demandados, no cumple con los requisitos establecidos en la parte inicial del artículo 321 C.P.A.C.A.

Así mismo también manifiesta que no se cumplen los requisitos del numeral 3 del artículo 321 de C.P.A.C.A en cuanto a que el demandante no presenta prueba de que sería más gravoso para el interés público negar la medida cautelar.

Finalmente, el demandado manifiesta que el demandante no cumplió con la carga de probar el perjuicio irremediable generado por los actos administrativos solicitados en suspensión y que la mera enunciación de los presuntos perjuicios no satisface la obligación impuesta por la ley para la solicitud de medida cautelar.

IV. CONSIDERACIONES

4.1 PROBLEMA JURÍDICO.

El asunto que se discute se contrae a establecer si es procedente decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados.

Para resolver el problema jurídico, se realizará un recuento normativo y jurisprudencial acerca de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, para luego descender al análisis de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto, dejar de presente cuáles son sus requisitos y finalmente aplicarlo al caso concreto.

4.2. RECUESTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL ACERCA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:

El artículo 238 de la Constitución Política establece:

“ARTÍCULO 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-31-000-2018-01245-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial".

La Corte Constitucional, en sentencia C-834 de 2013, se pronunció respecto a la finalidad de las medidas cautelares, de la siguiente manera:

"(...) Las medidas cautelares, son aquellos mecanismos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la Ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido (...)"¹.

Por su parte, la Ley 1437 de 2011 creó un moderno y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos, y en el artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para *"proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia"*. Además, indicó que las medidas cautelares proceden: **i)** en cualquier momento; **ii)** a petición de parte debidamente sustentada, y **iii)** en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

El artículo 230 del CPACA clasificó las medidas cautelares como: **i) preventivas** (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; **ii) conservativas** (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un *statu quo*; **iii) anticipativas** (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante, y **iv) de suspensión** (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.

Los artículos 231 a 233 ibídem determinan los requisitos, la caución y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopción de alguna de las medidas cautelares enunciadas en el artículo 230.

Para mayor claridad, el Consejo de Estado, en reciente pronunciamiento², esquematizó la clasificación de los requisitos de las medidas cautelares, así:

¹ Corte Constitucional, Sentencia C-834/13. Referencia: Expediente D -9509. Demandante: Martín Bermúdez Muñoz. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 613 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso". Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013).

² CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, providencia del siete (07) de febrero de dos mil diecinueve (2019), rad: 05001-23-33-000-2018-00976-01 (5418-2018).



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-31-000-2018-01245-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

“Requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal y de índole material, para decretar medidas cautelares, en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

REQUISITOS PARA EL DECRETO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES		
REQUISITOS DE PROCEDENCIA GENERALES O COMUNES	DE ÍNDOLE FORMAL	Debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 229, Ley 1437 de 2011)
		Debe existir solicitud de parte ³ debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos donde opera de oficio (artículo 229, Ley 1437 de 2011).
	DE ÍNDOLE MATERIAL	La medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (artículo 229, Ley 1437 de 2011).
		La medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria entre la medida a decretar y las pretensiones de la demanda (artículo 230, Ley 1437 de 2011).

Requisitos de procedencia específicos, para decretar medidas cautelares, en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

REQUISITOS PARA EL DECRETO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES			
	SUSPENSIÓN PROVISIONAL	Si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, la cual puede surgir:	a) tras confrontar el acto demandado con estas
			b) tras confrontar, las normas superiores invocadas, con las pruebas.
		Si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el	Además de verificarse que exista una violación de las normas superiores

³ De conformidad con el párrafo del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las únicas medidas que pueden ser declaradas de oficio por el juez son las “medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-31-000-2018-01245-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REQUISITOS DE PROCEDENCIA ESPECÍFICOS		restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios...	invocadas debe probarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios (artículo 231, inciso 2º, Ley 1437 de 2011)
	Si se pretenden otras medidas cautelares diferentes a la de suspensión de los efectos del acto administrativo demandado, deben concurrir los siguientes requisitos:	a) Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho;	
		b) Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente la titularidad del derecho o de los derechos invocados;	
		c) Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla; y	
		d) Que, al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse los efectos de la sentencia serían nugatorios (artículo 231, inciso 3º, numerales 1º a 4º, Ley 1437 de 2011).	

V. CASO CONCRETO.

Como se señaló en el cuadro normativo y jurisprudencial, el examen de procedencia de la medida cautelar requiere verificar inicialmente la concurrencia de los elementos generales que permiten la imposición de la cautela. Estos requisitos generales son de índole formal y material.

Los requisitos de índole **formal** son: 1) Que el proceso judicial sea declarativo; 2) Que la solicitud sea presentada por una de las partes y debidamente argumentada en documento aparte o en la misma demanda.

En cuanto al primero de los requisitos de índole formal, debe manifestarse que efectivamente el proceso judicial es catalogado dentro de los denominados procesos declarativos, ya que el demandante solicita la declaratoria por parte del juez del caso de nulidad de ciertos actos administrativos y luego el restablecimiento del derecho, lo que le permite cumplir el primer requisito de índole formal.

Ahora bien, el segundo requisito de índole formal también puede entenderse cumplido, ya que como bien se vislumbra del mismo escrito de la demanda, el demandante ha reserva un acápite completo al interior de la misma para efectuar la solicitud de la medida.



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-31-000-2018-01245-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Los requisitos de índole **material** que ha establecido la ley y desarrollado la jurisprudencia son: 1) Que la medida sea considerada necesaria para proteger y garantizar el objeto del proceso y de la sentencia; 2) Que la medida cautelar solicitada debe tener relación directa con las pretensiones de la demanda.

Sobre el primero de los requisitos de índole material, debe manifestarse que el demandante no centra su atención en acreditar como sin la imposición de la medida cautelar, el objeto del proceso y la la sentencia quedará menguados, ya que su análisis y argumentación se centra en dos aspectos que si bien son necesarios para la concesión de ciertas medidas cautelares, no son de tal magnitud que permiten obviar los requisitos de índole material que igualmente deben ser acreditados por el solicitante de la medida, como una carga o impuesta por el legislador y reafirmado por la jurisprudencia, por ende, no puede este despacho entender cumplido el primer requisito de índole material.

En cuanto al segundo requisito general de índole material entra el despacho a analizar la estrecha relación de las pretensiones de la demanda y lo solicitado como medida cautelar. Para ello, vemos que el demandante plantea en la demanda de Nulidad y restablecimiento del derecho las siguientes pretensiones:

1. Que se declare la nulidad parcial del fallo de responsabilidad fiscal No. 004 del 3 de abril de 2008, proferido por la Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, a través del cual se declaró la responsabilidad fiscal del ingeniero Carlos Hernan Londoño Estrada, en CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS m/cte (\$5.840.640.322), en lo que respecta a la situación jurídica del demandante.
2. Que se declare la nulidad parcial del Auto No. 0223 del 8 de mayo de 2018, proferido por la Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, a través del cual se resolvió un recurso de reposición contra el anterior acto administrativo, en lo que respecta a la situación jurídica del demandante.
3. Que se declare la nulidad parcial del Auto No. 00649 del 8 de junio de 2018 proferido por la Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, por medio del cual se resuelve el grado de consulta y los recursos de apelación contra el fallo de responsabilidad fiscal, en lo que respecta a la situación jurídica del demandante.

Luego, en el mismo escrito de demanda, el demandante hace su petición de medida cautelar en los siguientes términos:



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-31-000-2018-01245-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1. Suspende provisionalmente y hasta que se dicte fallo de fondo sobre la presente demanda el fallo con responsabilidad fiscal No. 004 del 3 de abril de 2008, proferido por la Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, a través del cual se declaró la responsabilidad fiscal del ingeniero Carlos Hernan Londoño Estrada, en CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS m/cte (\$5.840.640.322), en lo que respecta a la situación jurídica del demandante.
2. Suspende provisionalmente y hasta que se dicte fallo de fondo sobre la presente demanda el Auto No. 0223 del 8 de mayo de 2018, proferido por la Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, a través del cual se resolvió un recurso de reposición contra el anterior acto administrativo, en lo que respecta a la situación jurídica del demandante.
3. Suspende provisionalmente y hasta que se dicte fallo de fondo sobre la presente demanda el Auto No. 00649 del 8 de junio de 2018 proferido por la Gerencia Departamental del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, por medio del cual se resuelve el grado de consulta y los recursos de apelación contra el fallo de responsabilidad fiscal, en lo que respecta a la situación jurídica del demandante.

Luego del análisis de las pretensiones de la demanda y de la solicitud de medida cautelar, puede concluirse que el demandante ha cumplido con el segundo requisito material, ya que las pretensiones de la demanda, van estrechamente relacionadas con los actos administrativos solicitados en suspensión de sus efectos, siendo estos los mismos, por lo que puede predicarse el cumplimiento del segundo requisito de índole material.

Es preciso señalar, que a la parte demandante al solicitar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados se le imponen varias cargas procesales adicionales que deben ser cumplidas y esbozadas en el escrito de solicitud de las medidas con el fin de que las mismas sean concedidas.

La principal carga procesal adicional o específica para este tipo de medida es **demostrar, mediante confrontación entre los actos demandados y la norma superior esgrimida, la violación manifiesta que generan dichos actos**, así mismo, se analiza la violación con respecto a las pruebas allegadas al proceso y como segundo requisito, **cuando el demandante solicite el restablecimiento del derecho, debe probar siquiera**



RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76001-23-31-000-2018-01245-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

sumariamente la existencia de los perjuicios generados. Por lo anterior, se procede a analizar cada argumento del demandante con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos específicos.

Ahora bien, con respecto a estos dos requisitos específicos, considera este despacho que no han sido cumplidos, ya que el demandante ha desarrollado toda una argumentación que no es en el marco de cumplir con los requisitos establecidos en el inciso primero y segundo del artículo 231 del C.P.A.C.A, ni de lo desarrollado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, sino que el mismo se ha dedicado enteramente en su escrito de solicitud de medida cautelar de suspensión provisional, a expresar porque en el presente caso se cumplen los requisitos de "*fumus boni iuris*" y "*periculum in mora*", requisitos que como bien lo expresa el inciso tercero del artículo 231 mencionado del C.P.A.C.A y es reafirmado por la jurisprudencia citada en la parte considerativa de esta providencia, son obligatorios para la concesión de otro tipo de medidas, tales como **conservativas, anticipativas o preventivas.**

Siendo únicamente obligatorios para la medida cautelar de suspensión provisional, los requisitos enunciados en los 2 primeros incisos del mencionado artículo, los cuales igualmente fueron desarrollados y reafirmados por la jurisprudencia, tal como se expresa en la parte considerativa de la presente providencia y en el cuadro explicativo de las mismas.

En mérito de lo expuesto y sin que implique prejuzgamiento, el despacho:

VI. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados por la parte demandante, en razón de lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS
Magistrado